

do legal, conforme á las leyes de desamortizacion; no estendiéndose el amparo á la ereccion del pueblo de Santa Marta, en cuanto á los efectos puramente políticos ó administrativos de la citada disposicion.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre primero de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por los reos Silvestre Romero y Abraham García, por creer que se violan en sus personas las garantías que otorgan los artículos 13, 19, 20, 21 y 23 de la Constitucion federal, con la determinacion de ser pasados por las armas como plagiarios del C. Francisco de Sales Vallejo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Silvestre Romero y Abraham García, sentenciados por la gefatura política de este Departamento á la pena capital, por el crimen de plagio, con arreglo á la ley de 10 de Abril del año próximo anterior, han ocurrido á vd. solicitando que la justicia federal los

ampare contra la autoridad encargada de ejecutar la sentencia.

Los quejosos consideran el caso comprendido en la fraccion 1ª art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, y las garantías que en su opinion consideran violadas, son las que consigna nuestro pacto federal en sus artículos 13 parte 1ª, 19 parte 1ª, 20, 21 y 23, es á saber: aquellas mismas garantías que la ley de 10 de Abril que queda citada, y se les aplicó para juzgarlos, mandó suspender en perjuicio de los plagiarios y salteadores.

Como ya ese juzgado ha tenido á bien, en su auto de 27 del próximo pasado, suspender la ejecucion de los reos, que debió verificarse el dia siguiente, este ministerio fiscal no se ocupará ya de otro punto si no es de aquel que ha servido de fundamento á los quejosos para iniciar este recurso, y cuya fuerza aparente ha logrado inclinar el ánimo del juzgado á mandar suspender la ejecucion de la pena.

El dafio hecho á la sociedad debe ser la verdadera medida de los delitos: este principio que reconocen todos los criminalistas, así como la justa alarma en que se encuentra nuestra sociedad por la escandalosa repeticion del crimen de plagio, determinaron, sin duda, al supremo Gobierno á iniciar ante el congreso de la Union la ley de suspension de garantías para los salteadores y plagiarios, cuya ley ha estado vigente desde el 10 de Abril de 1869 hasta igual fecha del corriente año, en que ha dejado de producir sus efectos.

En esta última circunstancia fundan los peticionarios el derecho que creen que los asiste para no ser ejecutados; pues concluido el término fijado por la ley que les suspendió las garantías, por ese solo hecho han vuelto á recobrarlas, y acaso se consideren con el de volver á ser juzgados con arreglo á las leyes comunes.

El promotor suscrito, no niega de ningun modo que los reos de estos delitos han vuelto al goce de sus garantías; esta es una

verdad incuestionable, siempre que se trate de un hecho acontecido despues de la cesacion de la ley; y no dejaria tampoco de adherirse á la opinion de los reos, siempre que durante el juicio y antes de pronunciada la sentencia hubiese ocurrido la derogacion: en este caso cuando menos abogaria porque se impusiese á los reos una pena menor, si esa fuese la aplicable al delito por la ley que volvía á estar vigente porque cesara la anterior; pero nada de esto puede ser aplicable al caso que motiva este recurso.

La autoridad política á quien se pidió el informe que previene el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, remitió por vía de tal, la acta que levantó contra los reos arreglada á la ley de 10 de Abril, así como las primeras diligencias, que en averiguacion del hecho se practicaron en el juzgado de primera instancia de Silao y en el 1º de esta capital.

El promotor pasa por alto toda reflexion sobre el crimen de plagio que los reos de que se trata cometieron en la persona de D. Francisco Vallejo, sus circunstancias agravantes, y las crueldades inauditas que aquellos desventurados usaron con su víctima para obligarlo á que les diese la exorbitante suma que le pedían por su rescate; la mision del ministerio fiscal que representa se reduce á examinar en el caso el punto cuestionable, á saber: si puede ó no puede ejecutarse la pena despues de que los reos han vuelto al uso perfecto de sus garantías individuales.

De la acta de que se ha hecho mérito aparece, que el asalto que sufrió D. Francisco Vallejo tuvo lugar el 26 de Octubre del año anterior, por los dos quejosos y otros asociados cuya aprehension no se ha obtenido todavia; que la acta que se les formó tuvo principio en 6 de Enero último; y que la sentencia que recayó en ella fué pronunciada en 9 del mismo; es decir, que así el delito como el juicio y la sentencia que causó ejecutoria, todo ello tuvo su ve-

rificativo dentro del término en que la ley de 10 de Abril estaba en todo su vigor, y suspensas las garantías á los plagiarios.

Al protestar los iniciadores de este recurso contra la aplicacion de la ley á un delito determinado en ella tan expresamente, y al invocar todas las garantías de que estaban privados cuando se les juzgó, es inconcuso que con el amparo que solicitan, piden tambien que se declare la nulidad de aquel proceso para volver á ser juzgados con arreglo á las leyes comunes. Esto es lo que debe considerarse como fin principal de su solicitud.

El Promotor cree; sin embargo, que nada puede argüirse contra la validez de aquel juicio, por que su legitimidad es punto incontrovertible, toda vez que en su tramitacion y resolucion definitiva, se ha sujetado la autoridad á las prescripciones de la ley vigente que le sirvió de texto, y que ninguna infraccion pudo haber cometido de las garantías que invocan los quejosos, en el supuesto de que no estaban en el goce de ellas.

Veamos pues, si la ejecucion de la pena, despues de derogada la ley que reglamentó el juicio, puede ofender á los sentenciados atacándoles sus garantías.

La sentencia que han pasado á la autoridad de cosa juzgada dán el juicio por totalmente terminado é instituyen obligaciones y derechos que no pueden desatarse por motivo alguno, y que tienen que hacerse efectivos, sean cuales fueren las leyes posteriores y las circunstancias que sobrevengan.

La sentencia es la verdad, dice un autor, cuando ha recibido la fuerza ejecutoria, y la verdad no puede ser controvertible.

El Dallos, al tratar de esta materia, precisamente en punto criminal dice: cap. 4º art. 2 Der lois parag 9, "y todas las condenaciones pasadas en autoridad de cosa juzgada en el momento de la nueva ley" "no deben menos de recibir su ejecucion,

"si no es que por un acto expreso y exprecial del Soberano, se mande cesar este efecto."

Una sentencia pronunciada por el juez competente, consentida ó pasada en autoridad de cosa juzgada, dice el autor que queda citado, forma y constituye una especie de contrato entre las partes que han obtenido, y lo que se ha dicho respecto á la indisolubilidad de los contratos debe aplicarse tambien á las sentencias, ya sea en cuanto á su validéz, en cuanto á sus efectos y en cuanto á su forma.

Por otra parte, está fuera de duda que pronunciada una sentencia que causó ejecutoria, con arreglo á una ley, no puede ser controvertida apelando á otra ley posterior, sin que se vulnere abiertamente el principio de la no retroactividad.

No obstante lo dicho, el representante fiscal no deja de comprender, que ciertos principios, por invulnerables y equitativos que sean en realidad, suelen ser conculcados en materia criminal en beneficio de los procesados, y acaso el de que se trata sea uno de ellos; pero tambien considera, que el ministerio que representa es ageno totalmente á esta cuestion; que tiene su oportunidad, y que ni aun podría resolverse por el juez que conoce de este recurso. Las autoridades competentes, en su tiempo y oportunidad, serán las que hagan las modificaciones que convengan en su aplicacion á los casos que ocurran; pues aquí solo se trata de la resolucion de un punto legal en lo mas extricto de su interpretacion.

El promotor fiscal antes de concluir quiere llamar la atencion del juzgado sobre el conflicto que resultaría de la concesion del amparo en el caso presente.

Los reos para solicitarlo no se quejan únicamente de la aplicacion de la pena; no reclaman que se les aplique en el orden legal que establecerian las leyes comunes vigentes al cesar la de 10 de Abril, sino que al invocar, como se dijo arriba, todas las

garantías de que estaban privados en el momento de juzgarlos, quieren obtener y lo manifiestan muy claro, la notificacion de aquel proceso.

Ya se dijo antes, que aunque los reos arguyen contra el juicio que se les formó, de la acta que original se ha remitido á este juzgado no aparece que en el proceso se haya cometido vicio alguno que importe violacion de garantías en perjuicio de los procesados. Si pues el juicio es válido, tiene que serlo en todas sus partes, y por lo mismo tiene que ser válida la sentencia con que se resolvió; si la sentencia es válida, si fué bien pronunciada, no puede constituir un acto ilusorio como sucediera si á pesar de esta consideracion se declarase que no era de llevarse á efecto la pena que impuso.

En tal caso, y en el supuesto de que los reos han sido ya juzgados, ¿qué autoridad sería la competente para imponerles una nueva pena? para este efecto, es de notar-se que la ley porque se les juzgó no otorga á los jueces comunes jurisdiccion alguna, y que las autoridades políticas la han perdido por la cesacion de la ley de 10 de Abril; cuya ley, por otra parte, no autorizaba mas que la aplicacion de la pena de muerte; para la imposicion de otra cualquiera no tendria jurisdiccion el jefe político de esta ciudad, aun dado caso que existiese la ley.

Resulta de lo dicho, que para librar á los reos quejosos de la pena á que han sido condenados, no habia otro recurso sin declarar al otorgarles el amparo que piden, que las garantías que invocan han sido violadas en su perjuicio por haberlos juzgado y sentenciado con arreglo á la ley de 10 de Abril; pero es posible esto cuando los quejosos no disfrutaban de aquellas garantías por tenerlas suspensas en todo el tiempo que duró la tramitacion del juicio hasta su conclusion?

Ya se ve por lo expuesto, que el digno personal del juzgado está en el riesgo de

dar un decreto público de impunidad, ó de detener perpetuamente en la prision á dos individuos, que quedarán sin jueces y sin ley por la que pudieran ser juzgados.

El Promotor no cree por eso, que el único medio para precaver esta dificultad sea necesariamente la ejecución de los reos; lejos de ello, desearía que vistos los casos ofrecidos, el Soberano diese una aclaración á este respecto en el sentido mas favorable á los procesados; pero si el legislador puede ser indulgente, los jueces no pueden menos de aplicar la ley y de observar el derecho con la imperturbable serenidad de la justicia; invocando ésta estrictamente, el Promotor no encuentra que el caso se pueda resolver sino conforme á los principios legales que deja indicados.

Por tanto, fundándose en lo que deja expuesto, este ministerio fiscal pide al juzgado se sirva declarar: que la justicia de la Union no ampara ni protege á Silvestre Romero y Abraham García contra la autoridad encargada de ejecutar la pena de muerte á que han sido sentenciados con arreglo á la ley de 10 de Abril del año próximo anterior, *cuan-do dicha ley estaba vigente*, por que con ese acto no sufren violencia en perjuicio de los quejosos las garantías á que se refieren en el escrito que tienen presentado para la iniciación de este recurso.

Guanajuato, Mayo seis de mil ochocientos setenta y uno. — *Zenon J. de Velasco.*

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Guanajuato, Setiembre quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido en 27 de Abril del presente año por Silvestre Romero y Abraham García, en contra del acto por el que la gefatura política de esta capital dispuso lo conveniente para que los mencionados fueran ejecuta-

dos al dia siguiente, como reos de plagio verificado en la persona del C. Francisco de Sales Vallejo: vista la suspension del acto reclamado; el informe de la gefatura política, que consistió en la remision del proceso original, comenzado por el juez de 1ª instancia de Silao, continuado por el 2º de letras de esta ciudad y concluido por la expresada gefatura respecto de los quejosos; Visto el pedimento del C. promotor fiscal; las pruebas rendidas por los actores; la citación para sentencia y todo lo demas que fué conveniente tener á la vista; y

Considerando: que Silvestre Romero y Abraham García consideran violadas en su personas las garantías que reconocen la parte 1ª del art. 13, la 1ª del art. 19 y los artículos 20, 21 y 23 de la Constitucion federal, porque habiendo espirado el 10 de Abril del presente año la suspension de garantías decretada contra los salteadores y plagiarios en 9 de Abril del año próximo pasado, no creen que la gefatura política haya tenido facultades para aplicarles el 27 de Abril, la pena de muerte señalada en la ley de aquella fecha, creyendo tambien ó dando á entender, que deben gozar de todas las garantías que conceden los citados artículos constitucionales.

Considerando: que del proceso remitido por la autoridad ejecutora aparece, que el plagio del C. Francisco de S. Vallejo tuvo lugar en 26 de Octubre del año próximo pasado; que aprehendidos los citados Romero y García en Santa Cruz en Noviembre siguiente, fueron remitidos á esta capital, donde en los primeros dias de Enero de este año se les juzgó por la gefatura condenándolos á la última pena; y que interpuesto por ellos el indulto, se les denegó por el Congreso del Estado en 20 del repetido Abril; de todo lo cual se viene en conocimiento, que tanto el delito como el juicio tuvieron lugar durante la suspension de garantías, por cuyo motivo no pueden invocar las que mencionan, que son precisamente las que el Congreso de la Union

creyó conveniente suspender, para reprimir el delito de plagio.

Considerando: que la circunstancia accidental de tratarse de ejecutar la pena, cuando ya habia espirado el término de la suspension de garantías, no puede hacer que el juicio y la pena se tengan por nulos, porque supuesto que la gefatura obró en virtud de facultades legales, no hay motivo para que la cesacion de estas surtiere el efecto que quieren los quejosos, toda vez que la ley no dispuso, que las penas pendientes de ejecucion en el momento de espirar la suspension de garantías, se volviera por no impuestas, y se volviera á sujeción á los reos á sus jueces naturales.

Considerando tambien: que al disponer la gefatura la ejecución de la pena impuesta por ella, no podia menos de obrar así, ya porque por regla general la ejecución de una sentencia corresponde al mismo juez que la pronuncia, ya porque el artículo 18 fraccion 2ª del reglamento de 11 de Abril de 1870, impone el deber de tal ejecución, so pena de grave responsabilidad; ya finalmente, porque la ley no hizo excepcion de la regla general en casos como el de que se trata. Por tales razones y fundamentos, y de acuerdo con lo pedido por el C. promotor fiscal, es de resolverse y se resuelve: que la justicia federal no ampara á Silvestre Romero y Abraham García contra las disposiciones de la gefatura política de esta capital encaminadas á la ejecución de la pena de muerte que en tiempo hábil se les impuso, y de la que no obtuvieron indulto, por el delito de plagio; declarándose tambien, que por la notoria insolvencia de los quejosos no se les imponen multa. Hágase saber á las partes, remítase copia autorizada de este fallo á la redaccion del periódico Oficial del Estado para su publicacion, y hágase otro tanto con los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

Así el C. Antonio Rincon primer suplente de este juzgado de Distrito, defini-

tivamente juzgando lo sentenció, mandó y firmó. Doy fé.—Antonio Rincon.—Luis G. Medina.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 27 de Abril último promovieron ante el juzgado de Distrito de Guanajuato, Silvestre Romero y Abraham García, presos en la cárcel de esa ciudad y condenados á la última pena por la gefatura política del departamento, como autores del plagio del C. Francisco de Sales Vallejo, alegando: que estaban en capilla para ser pasados por las armas al día siguiente, y que de llevarse á efecto la sentencia que los condena, se violan en sus personas las garantías que otorgan la parte 1ª del artículo 13, igual del 19, y los artículos 20, 21 y 23 de la Constitucion federal, pues que habiendo dejado de regir á la fecha de su ocursio, la ley de 9 de Abril de 1870, por la cual fueron juzgados, estaban en pleno goce de esas garantías que aquella ley suspende. Vista la suspension del acto reclamado, decretada por el juez de Distrito, el informe del gefe político, contra cuyas disposiciones se dirige el amparo; el proceso original instruido á los quejosos que acompañó la misma autoridad, incluyendo la denegacion del indulto que pidieron á la legislatura del Estado, y el pedimento del promotor fiscal, sosteniendo que no procede en derecho la solicitud de los quejosos, con todo lo demas que fué necesario ver.

Considerando: que de las constancias de autos aparece, que el delito de plagio por el que se procesó á Romero y á García, fué cometido, juzgado y sentenciado estando vigente la ley de 9 de Abril 1870: que segun esa ley, que declara suspensas para los plagiarios las garantías señaladas

por los mismos reos Romero y García, fueron estos juzgados y sentenciados á la pena de ser pasados por las armas; que se les negó el indulto, y con esto quedó la sentencia sin recurso; y que la ejecución de ella en manera alguna viola las garantías que los quejosos invocan siendo solo el cumplimiento de una ejecutoria legal. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez 1º suplente del Distrito de Guanajuato, pronunciada en 15 del presente mes, declarando: que la justicia federal no ampara á Silvestre Romero y Abraham García contra las disposiciones de la gefatura política de esa ciudad, encaminadas á la ejecución de la pena de muerte que en tiempo hábil se les impuso y de la que no obtuvieron indulto por el delito de plagio.

Devuélvase sus actuaciones al juez primer suplente de Distrito que las elevó acompañándole copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada. —Pedro Ogazon. —Juan J. de la Garza. —José Arteaga. —J. M. Lafragua. —P. Ordaz. —M. Auza. —S. Guzman. —Luis Velázquez. —M. Zavala. —José García Ramírez. —Luis María Aguilar, secretario.*

Son copias que certifico. México, Setiembre veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Campeche por el C. Joaquín Gutierrez de Estrada, como albacea de la testamentaria de la Sra. Dña Faustina Estrada de Gutierrez, contra un acuerdo del gobernador del Estado que declara, que al pueblo de Sahcabchen del partido de Champoton corresponde una legua cuadrada de las tierras del rancho de S. Pablo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, dice: En las diligencias de amparo que tengo á la vista promovidas por D. Joaquín Gutierrez de Estrada, pidiendo se le proteja contra una disposición del gobierno del Estado que ordenó la concesion de una legua cuadrada de las tierras del rancho de S. Pablo, para el pueblo de Sahcabchen, se notan algunos puntos de hecho que es indispensable esclarecer para poder pedir con mejor conocimiento de causa sobre si se debe ó no conceder el amparo. Tal es por ejemplo la asercion no comprobada del peticionario, de que los vecinos y autoridades del pueblo expresado siempre que fueron citadas para que manifestaran si tenían que observar algo en las mensuras que se practicaban del mencionado rancho, contestaron que nada tenían que objetar, porque estaban en la conviccion de que el pueblo no poseía mas tierras que las en que estaba situado. Esta aseveracion se halla en abierta contradiccion con lo que asegura el gefe político del partido de Champoton en el oficio que, como parte del informe del gobierno, obra de fojas 5 á 6, y en que trascribiendo la comunicacion que le dirigió el comisario municipal de Sahcabchen, manifiesta, que por datos que tiene adquiri-